



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE: 11001 33 35 010 2020 00362 00
CONVOCANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONVOCADO: JULIAN RUPERTO MOLINA GÓMEZ
CLASE: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la diligencia de Conciliación Prejudicial referenciada, remitida por la Procuraduría 119 Judicial II Para Asuntos Administrativos, contenida en el Acta de la Audiencia de Conciliación Extrajudicial 258-2020, realizada el 14 de diciembre de 2020, la cual se llevó a cabo entre el doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA en calidad de apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** y el doctor SANTIAGO ESTEBAN PALMARINI PALACIO, quien actúa como apoderado del señor **JULIAN RUPERTO MOLINA GÓMEZ**.

I. ANTECEDENTES

1. LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

1.1. PRETENSIONES

La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó conciliar la reliquidación y pago de las prestaciones económicas contenidas en el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de CORPORANÓNIMAS. En particular, se persigue conciliar la reliquidación y pago de las primas de actividad y por dependientes y la bonificación por recreación con base en la reserva especial del ahorro. Mientras la prima de actividad y la bonificación por recreación se reliquida del 8 de octubre de 2019 al 5 de julio de 2020, la prima por dependientes va del 1º de diciembre de 2018 hasta el 5 de julio de 2020. En total, se estimó el monto en dieciocho millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos diecisiete (\$18.632.617).

1.2 FUNDAMENTOS DE HECHO

Expresó que la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, COPORANOMINMAS, mediante el Acuerdo 040 de 13 de noviembre de 1991 adoptó el



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

reglamento general para reconocer y pagar las prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias, las cuales asumieron directamente todas las Superintendencias debido a la supresión de la aludida Corporación, por disposición del artículo 12¹ del Decreto 1695 de 1997. Como la Superintendencia excluyó la reserva de especial del ahorro de la liquidación de las prestaciones, los empleados demandaron a la entidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con el fin de solicitar la reliquidación. Si bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección D - en algunos casos negó las pretensiones de las demandas, en fallos posteriores condenó a la entidad. A raíz de esta circunstancia, el Comité de Conciliación de la Superintendencia decidió presentar propuestas de conciliación a los interesados a fin de reconocer la incidencia de la reserva del ahorro.

Sin embargo, aduce que a los convocados se les exigió desistir de los intereses y la indexación, y de iniciar cualquier acción legal; y sólo se les reconocerá el valor económico correspondiente a los últimos tres (3) años conforme a la liquidación adjunta. En general, las prestaciones reliquidadas se contraerían a: la prima de actividad, la bonificación por recreación, los viáticos, las horas extras, las cesantías, y la prima por dependientes, según el caso. Aclaró que respecto de la prima de servicios del Decreto 1042 de 1978 se acordó que no procede el pago porque la excluye la prima semestral que se paga conforme al artículo 59 del Acuerdo 40 de 1991. Igualmente, frente a la prima de alimentación se determinó que se paga con base en lo dispuesto en el Acuerdo 40 de 1991 en armonía con el Decreto 1965 de 1997, razón por la cual no se reconoce su indexación o actualización.

1.3 FUNDAMENTOS DE DERECHO.

La Superintendencia de Industria y Comercio aduce que la solicitud de conciliación acata las providencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que han determinado que la reserva especial del ahorro constituye el ingreso base de liquidación de las siguientes prestaciones sociales: la prima de actividad, la bonificación por recreación, los viáticos, las horas extras, y la prima por dependientes. Asimismo, la Jurisdicción ha considerado que

¹ "El pago de beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas a CORPORANONIMAS, contenido en los 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991, en adelante estarán a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiaran las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas en los términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo"



cuando existe una prima de características similares a la prima de servicios, no hay lugar al reconocimiento, según el Concepto 1349 de 10 de mayo de 2001 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; mientras que la indexación de la prima de alimentación no procede porque la Superintendencia carece de facultades para ello, según la sentencia del Consejo de Estado dictado dentro del proceso 25000 23 25 000 2002 3940 01 (3331-0). Precisó, igualmente, que la reserva especial del ahorro se ha incluido como base de liquidación de los aportes para pensión.

II. 1.3. Conciliación ante la Procuraduría 187 Judicial I para Asuntos Administrativos ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá²

La Procuraduría 119 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a la convocante, Superintendencia de Industria y Comercio, y al convocado Julián Ruperto Molina Gómez, a la audiencia de conciliación que se celebró el 14 de diciembre de 2020. En el Acta se registró que el convocado aceptó la propuesta que le formuló la convocante. En resumen, la propuesta conciliatoria se refiere a la reliquidación de prestaciones económicas que se contraen a las primas de actividad y por dependientes y la bonificación por recreación con base en la reserva especial del ahorro, por un monto de dieciocho millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos diecisiete pesos m/cte. (\$18.632.617), en las condiciones allí consignadas y el Certificación de 1º de julio de 2020 de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

II. CONSIDERACIONES

1. ESTUDIO DE PROCEDIBILIDAD.

El Decreto 1069 de 2015³ compiló las normas que regulaban la conciliación en los asuntos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que contenía, principalmente, la Ley 640 de

² "ARTICULO 3o. CLASES. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.

La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad.

PARAGRAFO. Las remisiones legales a la conciliación prejudicial o administrativa en materia de familia se entenderán hechas a la conciliación extrajudicial; y el vocablo genérico de "conciliador" remplazará las expresiones de "funcionario" o "inspector de Trabajo" contenidas en normas relativas a la conciliación en asuntos laborales" (Ley 640 de 2001).

³ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

2001⁴ y el Decreto 1716 de 2009⁵, aunque posteriormente lo modificó el Decreto 1167 de 2015⁶. El artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015 reúne los presupuestos procesales de la conciliación extrajudicial administrativa. Para los asuntos susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento los requisitos de procedibilidad se contraen a los siguientes: (i) que el asunto sea de carácter particular y contenido económico, y adicionalmente, que “sean conciliables” por disposición del artículo 161 del CPACA; (ii) el agotamiento de la actuación administrativa; (iii) que no hubiese caducado la respectiva acción; y (iv) que se realice con facultades para ello y a través de abogado⁷. En los párrafos subsiguientes se desglosarán estos requisitos.

1.1 CLASE DE ASUNTO.

El asunto conciliado cumple con la condición de ser de carácter particular porque se trata de los derechos laborales de Julián Ruperto Molina Gómez, en calidad de empleado de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, los derechos conciliados tenían un contenido económico correspondiente al valor producto de reliquidación de las primas de actividad y por dependientes y la bonificación por recreación con base en la reserva especial del ahorro la bonificación por recreación, por el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2018 al 5 de julio de 2020.

El Despacho considera que el asunto es conciliable porque las normas que regulan las prestaciones reclamadas no señalan expresamente que se liquida sobre la reserva especial del ahorro sino sobre el sueldo básico. Por manera que los derechos conciliados son inciertos y discutibles, pues se hace necesario que por la vía judicial se llegue a determinar si la reserva especial del ahorro, prevista en el artículo 58 del Acuerdo 40 de 13 de noviembre de 1991 de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, COPORANOMINMAS, se debería incluir o no para calcular el valor de la aludida prestación.

⁴ “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”

⁵ Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

⁶ Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

⁷ ARTÍCULO 2.2.4.3.1.1.5. DERECHO DE POSTULACIÓN. Los interesados, trátese de personas de derecho público, de particulares o de personas jurídicas de derecho privado, actuarán en la conciliación extrajudicial por medio de apoderado, quien deberá ser abogado inscrito y tener facultad expresa para conciliar. (Decreto 1069 de 2015).



Esta situación, más el carácter particular y económico del asunto, permite afirmar que el presente asunto es susceptible de conciliarse extrajudicialmente.

1.2. AGOTAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

Julián Ruperto Molina Gómez solicitó el reconocimiento de las diferencias provocadas por la exclusión de la reserva especial del ahorro de la liquidación de las primas de actividad y por dependientes y la bonificación por recreación. La petición se radicó el 4 de agosto de 2020. La respuesta se produjo a través del Oficio con radicado 20-271612-2-0 de 10 de agosto de 2020, según el cual la Superintendencia de Industria y Comercio haría el reconocimiento a través del mecanismo de la conciliación. El peticionario aceptó acudir al trámite conciliatorio en las condiciones fijadas por la entidad, por medio de Oficio de junio de 2020. Así que con la petición y la respuesta se estima agotada en debida forma la actuación administrativa.

1.3 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

Por disposición del artículo 164 del CPACA, los actos que versan sobre prestaciones periódicas están exceptuados del término de los cuatro (4) meses para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En este caso, la periodicidad de las prestaciones reclamadas en sede administrativa se encuentra atada a la vigencia de la relación laboral. Al respecto, la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal hace constar que Julián Ruperto Molina Gómez se desempeñó como Asesor 1020-14 entre el 20 de noviembre de 2018 y el 5 de julio de 2020. Esto significa que el acto administrativo que se pronunció sobre la petición de reliquidación y pago de la bonificación por recreación con base en la reserva del ahorro se encuentra sujeto a caducidad.

Sin embargo, se verificó que entre la expedición del aludido acto administrativo y la solicitud de conciliación extrajudicial no transcurrieron más de cuatro (4) meses. En efecto, el Oficio con radicado 20-271612-2-0 se expidió el 10 de agosto de 2020, y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 27 de octubre de 2020, esto es, en vigencia de la acción contenciosa administrativa. Así se llega a la conclusión que el acto sobre el cual giró la conciliación no se encontraba incurso en el fenómeno extintivo del medio de control de



nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4 DERECHO DE POSTULACIÓN.

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio confirió poder para que se realizará el trámite de conciliación, de acuerdo con la Resolución 291 de 7 de enero de 2020 “Por la cual se delegan unas funciones”. El convocado, Julián Ruperto Molina Gómez, confirió poder al abogado Santiago Esteban Palmarini Palacio con tarjeta profesional 309.980 del CSJ, conforme a los documentos adjuntados al presente trámite. Así se estima cumplida el aludido requisito.

2. ESTUDIO DE FONDO

Por disposición de la jurisprudencia, el acto conciliatorio se debe ajustar al principio de la legalidad, es decir, el acuerdo no pueda realizarse con transgresión de la ley, y por otra parte, el acto jurídico consensual no debe lesionar el patrimonio público. Bajo estas instrucciones jurisprudenciales, el estudio de fondo consistiría en el evaluar la juridicidad de los derechos conciliados, y que la suma a la que se comprometió a pagar la administración sea razonable dentro de los parámetros legales.

2.1. LEGALIDAD.

Aquí se trataría de determinar si la inclusión de la reserva especial del ahorro en la liquidación de las prestaciones económicas lo permite el ordenamiento jurídico. Al respecto se observa lo siguiente:

La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades “CORPORANONIMAS” administró el reconocimiento y pago de diferentes clases de prestaciones sociales a los empleados de las Superintendencias afiliadas, conforme a lo establecido en el Acuerdo 40 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas. La supresión y liquidación de Corporanónimas no eliminó este tipo de beneficios para los empleados de la Superintendencias, pues el Decreto 1695 de 1997 determinó ahora serían las propias Superintendencias, las que asumirían “El pago de los beneficios económicos del régimen



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los Decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas”. Así vemos que los beneficios del Acuerdo 40 de 1991 no se extinguieron con la supresión de Corporanónimas. Entre tales beneficios, en el Acuerdo 40 de 1991 se encuentra la reserva especial del ahorro. Su artículo 58 lo contiene en los siguientes términos:

“ARTICULO 58.- CONTRIBUCION AL FONDO DE EMPLEADOS- RESERVA ESPECIAL DE AHORRO.- Corporanónimas contribuirá con sus aportes al fondo de empleados de la Superintendencia y Corporanónimas, entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y, gastos de representación; de este porcentaje entregará Coporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%), previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el 5% de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley”

Se desprende de la precitada norma, que la extinta CORPORANÓNIMAS reconocía mensualmente a los empleados de las Superintendencias una suma dinero que equivalía al “sesenta y cinco (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y, gastos de representación”. La jurisprudencia debatió sobre la naturaleza de la reserva especial de ahorro, esto es, si es salario o constituía una prestación social, pues ello determinaba que se incluyera o no en la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Las voces que señalaban el carácter prestacional se fundamentaban en que la norma transcrita señaló que es una contribución de CORPORANÓMINAS al fondo de empleados de la Superintendencia afiliada, que no forma parte de la asignación básica, y adicionalmente, porque tampoco altera la escala salarial de los empleados de la Superintendencia de Industria y Comercio que es potestad exclusiva del Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Tampoco podría servir de base para aumentar el valor de las demás prestaciones sociales, pues las facultades otorgados para crear, suprimir, o adoptar los estatutos de las entidades públicas, no incluye crear emolumentos salariales y prestacionales de los empleados de las Superintendencias, según el artículo transitorio 20



de la Constitución Política y el artículo 30⁸ de Ley 344 de 1996.

Sin embargo, las tesis acerca del carácter salarial de la reserva especial de ahorro se impusieron en la jurisprudencia. El Consejo de Estado en no pocas providencia⁹ ha considerado que dicho emolumento retribuye directamente el servicio, y por consiguiente, constituye salario. Bajo esta concepción, la reserva especial al ahorro forma parte del sueldo básico, y por ende, incide en la liquidación de las prestaciones sociales devengados por los empleados de la Superintendencia.

A ello se suma, que el artículo 53 de la Constitución Política dispuso que se debe aplicar la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Aquí ha sido evidente que la duda que existe acerca del carácter salarial o prestacional de la reserva especial del ahorro, la jurisprudencia la ha despachado a favor del trabajador. Cuando ello sucede, el artículo 10 del CPACA indica que *“Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos”*. Esto significa que resulta forzoso acatar los precedentes jurisprudenciales que le otorgan efectos salariales a la reserva especial de ahorro prevista en el artículo 58 del Acuerdo 40 de 1991 de CORPOROANÓNIMAS.

El carácter salarial de la reserva especial del ahorro aplicado en este asunto torna legal el Acta de Audiencia de Conciliación 258-2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020 ante la Procuraduría 119 Judicial II Para Asuntos Administrativos

2.2 EL PATRIMONIO PÚBLICO

En el Acta de Audiencia de Conciliación 258-2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020

⁸ **ARTÍCULO 30.** Revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para suprimir o fusionar, consultando la opinión de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que desarrollen las mismas funciones o que traten las mismas materias o que cumplan ineficientemente sus funciones, con el propósito de racionalizar y reducir el gasto público. Igualmente, tendrá facultades para separar la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

⁹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “A”, Sentencia del 27 de abril de 2000, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; y Sentencia del 24 de julio de 2008, C.P. Jesús María Lemus Bustamante, Rad. 250002325000200449052801, entre otras.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

ante la Procuraduría 119 Judicial II Para Asuntos Administrativos, se acordó que la Superintendencia de Industria y Comercio pagaría a Julián Ruperto Molina Gómez dieciocho millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos diecisiete pesos m/cte. (\$18.632.617). El pago corresponde al resultado que arrojó la reliquidación y pago de las primas de actividad y por dependientes, y de la bonificación por recreación, todas con base en la reserva especial del ahorro.

Es importante precisar que la prima de actividad y bonificación por recreación se reliquidó por el periodo que va del 8 de octubre de 2019 al 5 de julio de 2020, mientras que la prima por dependientes comprende el lapso que transcurrió del 1º de diciembre de 2018 hasta el 5 de julio de 2020. Estas prestaciones conciliadas se deben liquidar con base en la reserva especial del ahorro que el convocado devengó en los años 2018, 2019 y 2020, pues según la constancia de la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, Julián Ruperto Molina Gómez se desempeñó como Asesor 1020-14 entre el 20 de noviembre de 2018 y el 5 de julio de 2020. Adicionalmente, la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Personal certificó que por tal concepto devengó los siguientes valores: en 2018 \$5.081.322, en 2019 \$5.309.982 y en 2020 \$5.581.854.

La liquidación se realizó conforme a las normas que regulan dichas prestaciones: (i) el artículo 44 del Acuerdo 40 de 1991 de CORPORANÓMINAS en cuanto dispuso que la prima de actividad equivalía a quince (15) de sueldo básico por año continuo de servicio; (ii) el artículo 3º del Decreto 451 de 1984 tasó la bonificación por recreación en dos (2) días de la asignación básica mensual, (iii) el artículo 33 del citado Acuerdo determinó que la prima de dependientes equivale quince (15) días mensuales de sueldo básico. En el Acta de Conciliación Extrajudicial los valores de la liquidación quedaron registrados así:

CONCEPTOS	2018	2019	2020	SUBTOTAL
Prima de actividad			2.790.927	2.790.927
Bonificación por recreación			597.258	597.258
Prima por dependientes	762.198	9.319.018	5.163.215	15.244.432
			TOTAL.	18.632.617

El convocado aceptó la anterior liquidación que formó parte del acto conciliatorio extrajudicial. El Despacho considera que los valores liquidados se ajustan a lo establecido en la ley, y no afectan el patrimonio público, máxime cuando el convocado liberó a la entidad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

del impacto sobre otras prestaciones y los frutos como los intereses, por lo que se procederá a aprobar el acto jurídico conciliatorio.

En este orden de ideas, es claro que en el presente caso se cumple con los presupuestos exigidos para aprobar la conciliación prejudicial, realizada entre la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** en calidad de Convocante y el **JULIAN RUPERTO MOLINA GÓMEZ**.

De lo expuesto en precedencia, esta instancia judicial, advierte que la conciliación prejudicial, realizada entre el apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** en calidad de Convocante y el señor **JULIAN RUPERTO MOLINA GÓMEZ** por valor de **\$18.632.617** reúne los requisitos para ser aprobada, toda vez que el convocado agotó debidamente los recursos dentro del procedimiento administrativo, la acción no se encuentra caducada y no se causa detrimento al erario público, pues los valores reconocidos, corresponden a sumas que deben ser canceladas al convocado, razón por la cual será aprobado el acuerdo celebrado ante la Procuraduría 119 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Por lo tanto el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: APROBAR el Acta de la Audiencia de Conciliación Extrajudicial 258-2020 que se celebró el 14 de diciembre de 2020, correspondiente a la solicitud de conciliación con radicado E-2020-562545 de 27 de octubre de 2020, expedida por la Procuraduría 119 Judicial II para Asuntos Administrativos, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio y Julián Ruperto Molina Gómez con cédula de ciudadanía 80.237.254 conciliaron la reliquidación de la prima de actividad, la bonificación por recreación y la prima de dependiente, que ascendió a dieciocho millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos diecisiete pesos m/cte. (\$18.632.617), en las condiciones acordadas en la precitada Acta, conforme a lo expresado en este proveído.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

SEGUNDO: El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada de conformidad con el artículo 72 de la Ley 446 de 1998.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones y constancias del caso, expídanse copias a las partes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
Juez

gpg

Firmado Por:

LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ
JUEZ

**JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE
BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

60b622aae88ca09e899daf66ad5906d296f4bc3134571b5bb997021ddbfc0249

Documento generado en 23/02/2021 11:40:20 AM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2020 00362 00

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>